Alternativa ciudadana por la paz:

Reflexiones en torno a los diálogos de La Habana

> Oscar Andrés Espitia Lombo

Economista
Profesor Universitario

Crece la audiencia y el optimismo en torno a los diálogos

vanzan los diálogos entre Gobierno y FARC en La Habana por "la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". La discusión de la agenda acordada se desarrolla en la órbita del Gobierno y la insurgencia, abordado hasta ahora el punto sobre *Política de Desarrollo Rural Integral, con enfoque territorial*.

En medio del hermetismo en que se han desarrollado las deliberaciones, es buena señal el comunicado conjunto del 24 de enero, donde las delegaciones de Gobierno y FARC aseguran haber logrado "aproximaciones [...] en lo que tiene que ver con erradicar la pobreza rural y lograr una transformación de la realidad del campo a través de programas integrales que democraticen el acceso a la tierra, que sean sostenibles, que regularicen y den seguridad jurídica a la propiedad y que aseguren bienestar al mayor número de campesinos y población rural".

En el mismo sentido se lee la misiva enviada por las FARC el 22 de enero a Milenko Skoknic, delegado del gobierno de Chile como acompañante de la mesa de diálogos, donde la insurgencia manifiesta haber encontrado "afortunadas coincidencias con el Gobierno" sobre el tema agrario.

Valga destacar la realización del Foro Agrario el pasado diciembre, con la nutrida y entusiasta participación de sectores organizados de



campesinos, afros e indígenas, también de académicos, gremios del sector como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y partidos políticos, con la notoria ausencia de FEDEGAN. Un espacio de deliberación y construcción, desde abajo, de alternativas de desarrollo para el campo colombiano, que arrojó 11 folios de propuestas dirigidos a la mesa de diálogo, con el ánimo de enriquecer las deliberaciones y los posibles acuerdos entre Gobierno e insurgencia.

Asimismo, las Diez propuestas para una política de desarrollo rural y agrario integral con enfoque territorial de las FARC, empiezan a ser objeto de deliberación pública por parte de académicos, organizaciones sociales, medios de comunicación y de la ciudadanía informada, teniendo como referente la política agraria del Gobierno establecida en el Plan de Desarrollo 2010-2014, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y lo que se conoce de la Ley de Desarrollo Rural.

Han suscitado especial interés aspectos como la "realización de una reforma rural y agraria integral, socioambiental, democrática y participativa" (punto 1); el *fondo de tierras*, que estaría conformado por predios provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, baldíos, tierras apropiadas mediante el uso de la violencia y el despojo y las incautadas al narcotráfico (punto 5); y la propuesta de tránsito hacia las producciones alternativas o de sustitución, o para la legalización de cultivos ilícitos con fines medicinales y terapéuticos o por razones culturales (punto 4).

Todo ello genera expectativas sobre la posibilidad de que se logre un acuerdo entre Gobierno y FARC en lo que corresponde al desarrollo rural integral, asunto álgido, considerando la confrontación ideológica que encarna. También sobre el resto de los puntos que componen la agenda de los diálogos. Hay motivos para ser optimistas.







4 de febrero de 1992: Levantamiento militar revolucionario contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Chávez: "...no fue un golpe de Estado, fue una revolución de la juventud militar." "Esa rebelión desató una fuerza extraordinaria sobre todo en las clases populares. Esa fuerza es la que sigue empujando este proceso." Tomado de: http://www.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2012/02/Tte.-Ricardo-Torres-toma-Aeropuerto-de-Valencia.jpg - http://ideasdebabel.files.wordpress.com/2012/02/4-de-febrero-de-1992-11.jpg

El uribismo como amenaza

El ex presidente Uribe apuesta su futuro político al fracaso de los diálogos y al surgimiento de una reacción ciudadana similar a la que suscitó el fracaso del Caguán, azuzando el pesimismo y la desconfianza dentro de la población que milita en el escepticismo, que es la mayoría.

En declaración expedida el 20 de enero, Uribe y su nomenclatura de refritos del "Centro Democrático" anunciaron para el 31 de ese mismo mes el lanzamiento de su plataforma política, con miras a las elecciones a Congreso y presidencia, y a la conformación de "una organización permanente y decisiva en la política colombiana". Asimismo, rodearon al presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie, a propósito de sus aseveraciones en el periódico El Tiempo (20 de

enero de 2013), con las que se declaró en contra del actual proceso de diálogo entre Gobierno y FARC y a favor de la prolongación de la guerra, bajo el eufemismo del imperio de la ley. También desestimó la cuestión de la propiedad rural como uno de los motores del conflicto.

Es claro que el despliegue de las contradicciones al interior del bloque social dominante se ha exacerbado a la sazón de los diálogos, al igual que se observa en la cuestión del estilo de gobierno y en el manejo de la política internacional. En la dialéctica de continuidad y ruptura entre los gobiernos de Uribe y Santos, el proyecto económico y político del establecimiento exhibe fisuras, propiciando una dinámica constante de alineamientos y reacomodos





de los de arriba. Es así que la confrontación entre el ex presidente Uribe y el gobierno de Santos continúa agudizándose.

Uribe, que no está liquidado y promete dar pelea, apuntala su proyecto político en la oligarquía terrateniente, particularmente en el gremio ganadero –FEDEGAN–, y en los sectores adeptos al conservadurismo autoritario, movilizándolos por la prolongación de la guerra y la radicalización de la política de seguridad, con el militarismo como ideología dentro y fuera de las fuerzas militares, en lo doméstico e internacional.

Movilización ciudadana por la paz

El hecho de que se haya privilegiado la perspectiva del diálogo y negociación política es producto de la larga lucha de los movimientos de víctimas, campesinos, indígenas y afros, que han resistido el prolongado ciclo de la violencia. Al igual que por la acción de juristas, periodistas, académicos, estudiantes, mujeres, trabajadores y defensores de derechos humanos, que hemos hecho nuestras las banderas de la solución negociada, el rechazo a la violencia como método de acción política y como praxis de la élite dominante para la consolidación de su inveterado poder.

En el contexto internacional, los movimientos de Derechos Humanos, gobiernos e instituciones han estado demandando el fin de la larga guerra. En ese sentido, los gobiernos de Venezuela, Cuba, Chile y Noruega, al igual que los del resto de países de América Latina e incluso de Estados Unidos, han rodeado con su solidaridad el proceso, unos más que otros.

Por parte del Gobierno, la voluntad de sentarse a dialogar con la insurgencia con perspectivas de paz pasa también por cálculos de rentabilidad y conveniencia para los grandes negocios de agrocombustibles, forestales, de extracción petrolera, aurífera y de otros minerales, usufructuados principalmente por multinacionales.

Es seguro que, luego de un posible acuerdo, varios de los costos derivados del conflicto pasaran del debe al haber en los balances de dichos negocios. No obstante, resulta evidente que quienes más se han beneficiado del teatro de la guerra en Colombia son tales conglomerados económicos. La guerra entre el Estado y las guerrillas les ha permitido, entre otros, echar a andar mecanismos de acumulación respaldados en el uso de la violencia –con su cortejo de muerte y desplazamiento forzado– y asegurarse contratos de

El factor principal que determina el desenlace de la mesa de diálogos, en uno u otro sentido, está en la dinámica del movimiento ciudadano y de opinión, aquí y en el exterior. Puede construirse la ecuación de que a mayor y más fuerte movilización y presencia colectiva de ideas, aumenta la posibilidad de una paz que tenga contenidos sociales. Y a menor presencia, disminuye tal posibilidad.

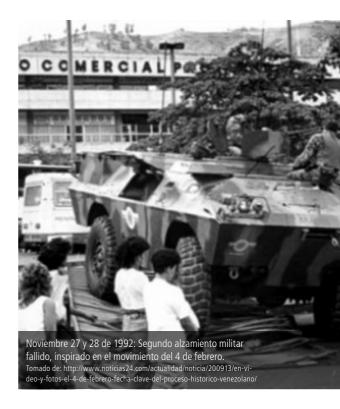
seguridad jurídica, con costosas exenciones y exoneraciones tributarias para el erario público.

Ahora bien, la tarea de la paz en Colombia no solo es necesaria y posible, también resulta urgente, para avanzar hacia la construcción de una democracia robusta y plena. Esto, considerando que el desarrollo de la lucha de clases hasta nuestros días ha situado la movilización democrática en el centro de las expresiones política de los de abajo, tal como lo refleja la dinámica de las multitudes europeas, de la Primavera Árabe y de Nuestra América, contra el neoliberalismo y por la superación del capitalismo, con destacado protagonismo de los trabajadores.

Debe crecer la apropiación social de la causa de la paz, la más alta aspiración moral de nuestro tiempo en Colombia, que propicie una amplia deliberación y movilización ciudadana y que exija a la insurgencia y al Gobierno llegar a un acuerdo definitivo, realista y posible.

Hay que tener claro que el Gobierno y la insurgencia son los encargados de fijar, en última instancia, la dimensión de dichos acuerdos. Pero el factor principal que determina el desenlace de la mesa de diálogos, en uno u otro sentido, está en la dinámica del movimiento ciudadano y de opinión, aquí y en el exterior. Puede construirse la ecuación de que a mayor y más fuerte movilización y presencia colectiva de ideas, aumenta la posibilidad de una paz que tenga contenidos sociales. Y a menor presencia, disminuye tal posibilidad.

Solo el desenvolvimiento de la lucha de clases, actualmente bloqueada por el desarrollo de las guerras en curso desde hace



varias décadas en Colombia, posibilitará la necesaria apertura democrática que requiere el país y los cambios de fondo que demandan las mayorías nacionales, como la reforma a los medios de comunicación, la reestructuración de la política de seguridad y el papel de las fuerzas militares en la democracia, la urgente reforma agraria integral, campesina, indígena y afro, del sistema educativo y del modelo económico, así como los distintos puntos que la agenda colectiva de las organizaciones sociales de base vienen construyendo.

Hay que repetirlo: en esta coyuntura de diálogos, solo la más amplia y entusiasta movilización ciudadana propiciará el mejor desenlace posible. En ella reside la clave de la paz.





